

Cuba: dictadura y crisis

Ángel Pérez González

Los años 2003 y 2004 pasarán a la historia de Cuba como símbolo de crisis económica y política. La dura represión, los juicios sumarios, el encarcelamiento de opositores y el asesinato de los tres secuestradores del ferry Havana Bay que pretendían huir hacia los EE UU han empeorado notablemente la percepción exterior del régimen, asediado por las disfunciones económicas y empeñado en culpar al gran vecino del Norte de todos sus males. Un retroceso evidente en el lento, pero progresivo camino que habían recorrido las relaciones cubano-americanas y las tímidas reformas que a finales del siglo pasado parecieron desear el dictador y sus colaboradores.

La respuesta cubana a los problemas económicos y a las críticas procedentes del exterior ha sido aislacionista y poco elegante, comportamiento que tuvo además su traducción diplomática en el rechazo de la isla a su incorporación al acuerdo de Cotonu, sustituto de los acuerdos de Lomé. La violación sistemática de derechos fundamentales ha hecho inútil el trabajo de los congresistas y senadores estadounidenses que trabajaban en favor de una relajación de la política norteamericana hacia la isla y ha reforzado en el exterior la solidaridad con los detenidos.

El comportamiento de Castro ha

sido interpretado como un último recurso para mantener la ya escasa legitimidad del sistema, amenazado por lo que parecía una inevitable mejora de las relaciones con EE UU. La oposición creciente en el Congreso norteamericano a un embargo que no acaba por tener los resultados deseados estaría en el fondo de una reacción desmesurada que recuerda a los sucesos de 1996. Ese año se procedió al desmantelamiento de la organización disidente *Concilio Cubano*, al tiempo que la fuerza aérea cubana destruyó en vuelo dos avionetas de la organización cubano-americana *Hermanos al Rescate*.

También se ha especulado con la posibilidad de que la ocupación aliada de Irak hiciese creer a Castro y sus colaboradores que la invasión de la isla era inminente. En cualquier caso la ausencia de medidas defensivas no concede mucha credibilidad a esta opción, aunque la retórica de guerra ha sido siempre uno de los instrumentos de propaganda fundamentales de la dictadura isleña. Lo más probable es que, ante el colapso de la economía, una reacción de este tipo pretendiese y pretenda tanto desviar la atención como recordar a la disidencia los límites que en ningún caso debe franquear.

La disidencia

La justificación de las duras medidas represivas, en particular del fusilamiento de los tres secuestradores, no tuvo éxito. Numerosos intelectuales de izquierda, normalmente poco sensibles ante los excesos del régimen, manifestaron su oposición a tales acontecimientos. Lo mismo sucedió con las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Pero más allá de los acontecimientos descritos, el fenómeno opositor que más ha preocupado a Fidel Castro ha sido hasta la fecha *el proyecto Varela*, iniciado por un hombre desconocido hasta el año 2002: Oswaldo Payá. Este personaje, de origen humilde, católico y comprometido con la isla hasta el punto de afirmar que nunca abandonaría Cuba, fue capaz de reunir las firmas necesarias para exigir la realización de un referéndum sobre distintas opciones políticas. Esta fórmula, recogida entonces en la constitución cubana, no había sido empleada nunca. Que once mil personas dieran su nombre, por tanto lo dieran a conocer al gobierno, para facilitar la iniciativa resultó un éxito. Además representaba la primera oposición interna que utilizaba el sistema legal cubano para modificarlo. Un camino prometedor que represen-

taba un serio riesgo para el dictador.

El proyecto Varela preocupó de inmediato al régimen por dos razones principales. La primera porque dejaba en evidencia a Fidel Castro y a su gobierno. Utilizar un recurso legal para intentar establecer un nuevo rumbo, más democrático, obligaba al dictador a decidir entre respetar la constitución por él mismo otorgada y poner en peligro la dictadura socialista que el encarnaba; o negarse a aceptar esa vía y poner así en evidencia las carencias del régimen ante los ciudadanos. La segunda, porque la presentación de un documento firmado por once mil personas con la intención de poner en marcha el procedimiento de consulta mostraba cuán extendido estaba el descontento, por tanto cuán amplia era la base potencial de la oposición.

La posibilidad de que esta tendencia se consolidara y terminara fuera del control del Estado, unido al hecho de que Payá carecía de vínculos con los EE UU y no podía ser desacreditado por esa vía, obligaron a Fidel Castro a tomarse en serio los acontecimientos.

La respuesta del régimen fue contundente. El partido comunista

propuso, en medio de grandes movilizaciones de masas, la reforma de la constitución con objeto de introducir en ella el carácter irreversible del socialismo. Tal posibilidad fue sometida a referéndum, cuyo resultado, como era previsible, fue favorable al gobierno (99,37% del electorado votó a favor, según la información oficial

*La respuesta cubana a los
problemas económicos y a
las críticas procedentes del
exterior ha sido aislacionista
y poco elegante*

cubana). Finalmente en junio de 2002 la Asamblea Nacional, en un acto retransmitido por televisión, procedió a ejecutar la modificación de la ley fundamental. Todo el acontecimiento fue presentado como una respuesta a la presión norteamericana, y la propia modificación constitucional justificada como una respuesta a Bush, presidente de los EE UU.

Por fin en abril de 2003 Castro procedió al encarcelamiento de 75 activistas del «Proyecto Varela» y al fusilamiento de los secuestradores de un ferry que pretendían alcanzar la costa de Florida. El juicio sumario, la ausencia de garantías y la dura condena resultaron

del todo desproporcionados, habida cuenta de la ausencia de violencia que acompañó el secuestro. Las explicaciones del gobierno cubano se basaron, como de costumbre, en la perfidia del enemigo americano. En esta ocasión se insistió en la posibilidad de una pronta invasión de la isla para encubrir los motivos reales de la re-

*once mil personas se
atreveron a firmar la
demanda de un referéndum
previsto por la constitución,
y dejaron en evidencia al
régimen castrista*

presión, el miedo a que la inquietud interna se extendiera por el país. Con aquellos acontecimientos se dio una lección de fuerza a los disidentes y a los gobiernos extranjeros. Su desmesura está fuera de lugar dado el carácter incipiente, desorganizado e infiltrado de la disidencia, incapaz entonces y ahora de poner en peligro al dictador.

Las consecuencias, sin embargo, han sido contraproducentes. La imagen de debilidad proyectada por Castro y su gobierno ante una amenaza tan fútil como endeble sólo puede traducir el nerviosismo creciente de un régimen que

observa cómo el tiempo corre en su contra. Ahora es posible afirmar que no habrá cambios mientras viva Fidel Castro, pero también es posible reconocer las señales del deterioro definitivo del sistema político cubano. La única concesión castrista a la disidencia ha sido dejar en libertad vigilada a Payá, tan sólo por las repercusiones internacionales que tendría su encarcelamiento, entre ellas la de impulsar su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

México

Uno de los síntomas más evidentes de la crisis cubana es la dificultad creciente del régimen para mantener la salud de las relaciones con otros Estados tradicionalmente amigos o comprensivos con la isla. El régimen se ha quedado progresivamente solo, a medida que la UE, Canadá y la mayor parte de los Estados latinoamericanos dejaban constancia de su decepción ante la negativa castrista a realizar cambios políticos encaminados a establecer un régimen democrático.

Las relaciones con México constituyen una prueba de esta soledad cada vez más evidente. Durante cuatro décadas México y Cuba mantuvieron una relación espe-

cial, la correspondiente a dos sistemas autoritarios, de izquierdas y de origen revolucionario que, además, coincidían en su aversión hacia los EE UU. La conversión de México en una democracia multipartidista, la integración de México en el TLC y la victoria de Vicente Fox cambiaron el escenario drásticamente. Ya no es posible mantener la antigua relación cubano-mexicana, y las tensiones bilaterales se han multiplicado.

El cambio de política hacia Cuba había comenzado en México durante el gobierno Zedillo. Fox se propuso reconducirla de acuerdo con tres criterios: recuperar los niveles de cooperación previos a ese período; mantener una actitud crítica hacia la violación de derechos humanos en la isla y mantener contactos con la disidencia cubana. El ministro encargado de ejecutar esa nueva política fue Jorge Castañeda, una persona de entrada poco grata en Cuba por sus ideas liberales y filoamericanas.

El primer acto diplomático en el que se escenificó la nueva situación fue la votación en 2001, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, condenando las prácticas en ese ámbito del gobierno cubano. México se abstuvo. La votación contraria al embargo esta-

dounidense en la Asamblea General de Naciones Unidas permitió, sin embargo, compensar ese primer gesto crítico. La tormenta se desencadenó en 2002 cuando, tras una visita a la isla, Fox y Castañeda se entrevistaron con miembros de la oposición al régimen castrista. Poco después la embajada mexicana fue asaltada por supuestos emigrantes y las fuerzas cubanas procedieron a la ocupación de las instalaciones y la retirada de los ocupantes. Finalmente, tras su estancia en Monterrey, Castro dio a conocer una conversación privada entre él y Fox en la que este último le pedía que abandonase la cumbre antes de tiempo para no incomodar al presidente de EE UU. La crisis a esas alturas era profunda y sólo pudo empezar a superarse tras la dimisión de Castañeda a principios de 2003.

En otoño los ministros de asuntos exteriores de ambos países, Ernesto Derbez y Pérez Roque, se reunieron para materializar la sintonía entre ambos gobiernos. Sintonía que duraría poco. En la primavera de 2004 fue detenido en La Habana Carlos Ahumada, empresario mexicano que poseía cintas de video donde se recogían escenas de soborno a dirigentes del PRD y del gobierno del distrito federal. Fidel Castro intentó utilizar

este suceso para presionar a México en la nueva votación en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Fox no cedió, y Cuba procedió a la deportación de Ahumada. Poco después se retiraban los embajadores en medio de acusaciones de injerencia cubana en la política interior mejicana y dependencia mejicana de los EE UU.

uno de los síntomas más evidentes de la crisis cubana es la dificultad creciente del régimen para mantener sus relaciones con Estados tradicionalmente amigos

Conclusión

El recrudecimiento de la represión en un contexto de crisis económica y social permanente traduce el cansancio de un régimen fracasado. La lamentable situación de la isla, el bajo nivel de vida y la ausencia de libertades civiles no responden a la mitología revolucionaria, anticapitalista y de-

magógica al uso en el gobierno cubano. La dictadura se acerca a su fin lentamente, aumentando en ese período indeterminado de tiempo los esfuerzos por sobrevivir, incluso si éstos conllevan una elevada carga de indignidad.

En este escenario deben entenderse las complicadas relaciones entre Cuba y México. La instauración de regímenes democráticos en Latinoamérica ha aislado a Cuba, pero también ha ofrecido posibilidades inéditas de injerencia en los asuntos internos de aquellos países donde la mitología revolucionaria y el populismo juegan todavía a favor de la imagen del régimen castrista. México, Perú o Bolivia son ejemplos de la extraordinaria capacidad de la acción exterior cubana para defender sus intereses en un medio hostil, aunque permeable. La acumulación de información sensible y la aproximación a partidos de izquierda ofrecen interesantes posibilidades en los procesos electorales; y el radical antiamericanismo sigue siendo bien percibido por una parte importante de la sociedad latinoamericana. ■